



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2025

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Administración Federal de Ingresos Públicos s/ recurso de queja”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que contra la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa, que rechazó la queja por denegación del remedio extraordinario local, la Administración Federal de Ingresos Públicos dedujo recurso extraordinario federal que, al ser denegado, motiva la queja en examen.

2º) Que esta Corte comparte y hace suyos los argumentos y conclusiones expuestos en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal.

En efecto, se constata en las actuaciones una afectación de la garantía de la defensa en juicio, por cuanto los jueces de la causa, al impedir su actuación como tercero en el proceso, han privado a la Administración Federal de Ingresos Públicos de manifestar lo que estimaba pertinente para defender su derecho, colocándola en un estado de indefensión incompatible con el respeto de las garantías constitucionales que deben asegurar los tribunales de justicia.

3º) Que el cotejo de las actuaciones pone en descubierto una actividad procesal formalmente defectuosa de tal entidad que, más allá de los vicios que pudieran descalificar la sentencia apelada con arreglo a la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad, afecta la validez misma de su pronunciamiento; circunstancia que debe ser atendida y declarada con antelación al tratamiento de los agravios concretos planteados por la recurrente.

Ello es así, por cuanto si bien es doctrina de esta Corte que sus sentencias deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional, no podría ser confirmada por sentencias ulteriores (Fallos: [183:173](#); [189:34](#); [312:1580](#), entre otros).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado, se resuelve declarar la nulidad de todo lo actuado en la causa. Vuelvan los autos principales al tribunal de origen a sus efectos. Remítase la queja. Notifíquese y cúmplase.



CSJ 1808/2021/RH1

Administración Federal de Ingresos
Públicos s/ recurso de queja.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Recurso de queja interpuesto por la **Administración Federal de Ingresos Públicos**, representada por la **Dra. Mirian Graciela Medina**, con el patrocinio letrado de la **Dra. Sofía Aylen Rodríguez**.

Tribunal de origen: **Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa**.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: **Juzgado en lo Civil y Comercial n° 1 y Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, ambos de la Provincia de Formosa**.



MONTI
Laura
Mercede
S

Firmado
digitalmente por
MONTI Laura
Mercedes
Fecha:
2022.06.22
12:58:15 -03'00'

Ministerio Público
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

- I -

Las presentes actuaciones se originan en la medida autosatisfactiva solicitada por la Provincia de Formosa -por intermedio de la Fiscal de Estado- contra el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (en adelante "INAES") a fin de que se ordene a éste último que en el plazo de 48 hs. conceda a las cooperativas inscriptas en la provincia actora la matrícula nacional a fin de obtener las Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT) definitivas, disponiendo el levantamiento del bloqueo de las CUIT de dichas cooperativas provinciales inscriptas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y absteniéndose en lo sucesivo de proceder a nuevos bloqueos de ellas.

El pedido se sustentó en que el desarrollo de las actividades de las referidas cooperativas se vio interrumpido por la decisión del organismo fiscal federal de bloquear las CUIT en razón de que el INAES no les otorgaba la matrícula definitiva para poder funcionar.

El 8 de mayo de 2019, la jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 1 de la provincia hizo lugar al pedido de la actora y otorgó la medida autosatisfactiva solicitada, intimando al INAES a que "en el plazo de 3 (tres) días de notificada culmine con las actuaciones administrativas de los requerimientos de inscripciones y

matriculación de las cooperativas de la Provincia de Formosa..." y disponiendo, hasta tanto ello ocurra, el levantamiento del bloqueo o cancelación de las CUIT pertenecientes a las cooperativas de la Provincia de Formosa que se había efectuado por falta de culminación del trámite administrativo por parte del INAES.

Mediante oficio 1075/2019, se le notifica a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dicha medida y que, en consecuencia, debe proceder al levantamiento del bloqueo o cancelación de las CUIT pertenecientes a las cooperativas de la Provincia de Formosa.

Posteriormente, el 13 de mayo del 2019, el organismo fiscal se presenta y plantea -con sustento en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y art. 2°, incs. 1 y 6 de la ley 48- que, en que tanto ella como la demandada, el INAES, son reparticiones del Estado Nacional, la justicia provincial es incompetente para conocer en estas actuaciones y pide la remisión de las actuaciones a la justicia federal. Al tiempo que, con base en lo dispuesto en el art. 90 del C.P.C.C. de la Provincia de Formosa, solicita que, en tanto la sentencia que hace lugar a la medida autosatisfactiva produce el Fisco Nacional perjuicio y gravamen irreparable, se admita su intervención voluntaria como tercero en la causa.

Ante el rechazo *in limine* de su pedido para que -con sustento en que no revestía la calidad de parte en la causa- se admita su intervención como tercero, la AFIP plantea recurso de aclaratoria, al que el magistrado tampoco dio curso por idéntica razón.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Así las cosas, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el auto interlocutorio *mencionado ut supra*, por entender que "la medida dictada en autos afecta derechos constitucionales de la AFIP, colocándola en un estado de indefensión", al tiempo que recurrió por la omisión en que habría incurrido la jueza al no expedirse sobre la incompetencia planteada lo que, en su criterio, tornaba a la sentencia en ilegal y arbitraria.

El juzgado no hizo lugar a la revocatoria planteada pero sí concedió -en relación y con efecto devolutivo- el recurso de apelación en subsidio interpuesto.

Formado el incidente de estilo, se elevan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones provincial, la que, con fecha 2 de diciembre de 2019 -y pese a la opinión de la Fiscalía de Cámara, que consideró procedente el planteo de competencia-, declaró inoficioso pronunciarse sobre el recurso de apelación de la AFIP en razón de haberse dictado en idéntica fecha sentencia en el principal, confirmando el pronunciamiento de primera instancia que había hecho lugar a la medida autosatisfactiva, lo que, en su criterio, sumado al cumplimiento de la medida, tornó abstracto el planteo.

Contra dicha sentencia, la AFIP interpone recurso extraordinario local por arbitrariedad de sentencia, en el que sostuvo que el cumplimiento de la medida ordenada fue coercitivo y no voluntario -en tanto se aplicó, arbitrariamente y en contra de las reglamentaciones vigentes, sanciones pecuniarias al

organismo fiscal- y en la omisión de tratamiento de la cuestión de competencia planteada.

Dicho recurso, al ser rechazado por la cámara -en el entendimiento que no cumplía con el requisito de seriedad en el planteo, ya que la medida había devenido abstracta-, motivó la presentación de un recurso de queja ante el Superior Tribunal provincial-con sustento en que lo resuelto por el *a quo* resultaba arbitrario e irrazonable puesto que el procedimiento se encontraba viciado desde un principio, ya que la AFIP nunca había podido ejercer su derechos de defensa y a la tutela judicial efectiva.

Dicha presentación directa también fue rechazada por el Superior Tribunal el 21 de diciembre de 2020, confirmando que la cuestión planteada había devenido abstracta, siendo inoficioso pronunciarse sobre ella.

- II -

Disconforme con dicho pronunciamiento, el 22 de febrero de 2021, la AFIP interpuso el recurso extraordinario federal que, fue desestimado el 24 de agosto de 2021, por falta de cumplimiento de los requisitos formales exigidos en el art. 3°, incs. b), c), d) y e) de la acordada CSJN 4/07, lo que dio origen a esta presentación directa.

En lo sustancial, fundó el recurso en primer lugar en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia ya que, manifiesta, la decisión se sustentó en afirmaciones dogmáticas de hecho y de derecho, prescindió de considerar el texto legal aplicable y omitió considerar cuestiones oportunamente propuestas.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Asimismo puntualizó que se generaba en el caso un supuesto de gravedad institucional en tanto en la sentencia se habían puesto en tela de juicio normas de carácter federal y se desconocía la competencia federal.

Remarco que el pronunciamiento atacado no solo afectó las facultades y prerrogativas legalmente conferidas a la AFIP sino que tampoco se encontraba debidamente fundada ya que sólo remitía a lo dicho por la Cámara de Apelaciones en punto a que resultaba inoficiosa su intervención como tercero porque lo que se cuestionaba era una manda judicial en una causa ya resuelta y cumplida y, que, por lo tanto, el planteo devenía abstracto.

En este punto señaló que: a) la medida autosatisfactiva no se encontraba firme; b) en el fallo impugnado no había una sola línea que abordara las discrepancias que había planteado; c) tanto en la sentencia recurrida como en las de las instancia judiciales previas nada se dijo ni de porqué procedía la competencia provincial por sobre la federal, ni tampoco sobre la exigencia impuesta a la AFIP de cumplir la medida en cuestión; d) la decisión carece de fundamentación, sustentándose en meras afirmaciones dogmáticas y que los argumentos esgrimidos se apartan manifiestamente de las constancias de la causa, resultando por tanto violatoria de los derechos de defensa, al debido proceso, de propiedad, razonabilidad y tutela judicial efectiva.

Así concluyó: "nos encontramos ante una situación arbitraria, absurda e irrazonable donde a través de diversos y

reiterados pronunciamientos se han arrojado competencia federal para entender en la cuestión -son incompetentes en razón de la materia y de los sujetos- de imposible reparación ulterior", lo que, en su criterio, evidencia una abierta denegación del fuero federal.

- III -

De forma preliminar, debo advertir que las cuestiones relativas al cumplimiento de los requisitos formales de la elación extraordinaria, en tanto se vinculan con las pautas regladas en la acordada 4/2007, corresponde que sean examinados, en principio, por esa Corte (ver dictamen de este Ministerio Público in re T.454, L.XLIV, "Tren de la Costa S.A. e/Estado Nacional - AFIP", del 23 de agosto del 2010).

Si estimara el Tribunal que los defectos que la actora reprocha actora reprocha a la apelación del Fisco Nacional no son esenciales ni importan un obstáculo insalvable para admitirla, podría dejar de lado tales reparos para el caso de autos y realizar el examen de las cuestiones que éste trae ante vuestro estrado (conf. arto 11 del citado reglamento).

- IV -

Sentado lo anterior, estimo que asiste razón a la recurrente ya que no se debió privar a la AFIP de la posibilidad de intervenir en estos autos como tercero, puesto que la sentencia que hace lugar a la medida autosatisfactiva trajo como consecuencia que, mediante el oficio de fecha 8 de agosto de 2019, se ordenara al organismo fiscal proceder al levantamiento del bloqueo o cancelación de las CUIT pertenecientes a las



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

cooperativas de la Provincia de Formosa, bajo apercibimiento de aplicarle sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento.

Así las cosas, tengo para mí, que asiste razón a la quejosa en que la sentencia, al no admitir su intervención voluntaria como tercero, la privó de manifestar lo que estimare pertinente para la defensa de su derecho, colocándola en un estado de indefensión que afecta las facultades que le fueron legalmente otorgadas y su derecho constitucional de defensa en juicio, produciéndole un perjuicio y gravamen irreparable.

Al respecto, cabe recordar que entre las funciones de este Ministerio Público se encuentra la de velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal (art. 25, inc. h, de la ley 24.946) y que, en ejercicio de ese deber-atribución, un atento examen de las actuaciones pone al descubierto el modo formalmente erróneo e inadecuado en que se condujo el proceso, defecto de tal entidad que afecta la validez misma del pronunciamiento que V.E. habrá de dictar, circunstancia que debe ser atendida y declarada con antelación al tratamiento de las cuestiones planteadas por la recurrente.

Si bien es doctrina del Alto Tribunal que sus sentencias deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y

que afecta una garantía constitucional, no podría ser confirmada por las sentencias ulteriores (Fallos: 312:1580 y sus citas).

Desde esta perspectiva, advierto que la integración del proceso ha sido defectuosa, pues en mi criterio el rechazo a la solicitud de la AFIP de poder intervenir como tercero, afectó su garantía constitucional de la defensa en juicio, -sobre cuyo contenido la Corte ha señalado que requiere que se otorgue al interesado ocasión adecuada para su audiencia y prueba en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales (Fallos: 319:1600; 323:2653, entre otros)- lo que me impone la obligación de opinar que se debe declarar la nulidad de todo lo actuado sin intervención del Fisco Nacional la AFIP.

- V -

Por todo lo expuesto precedentemente, considero que corresponde decretar la nulidad de todo lo actuado.

Buenos Aires, de junio de 2022.